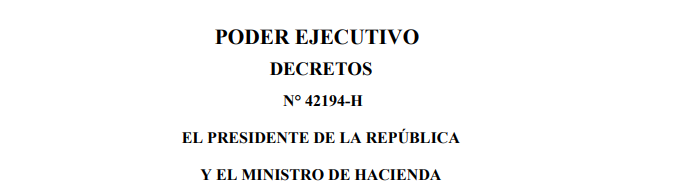
**La Gaceta N°26 – 10 Febrero 2020**



Con fundamento en las atribuciones y facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 apartado 2 inciso b) de la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, denominada "Ley General de la Administración Pública" y sus reformas.

Considerando:

I. Que de conformidad con el inciso 1 del artículo 158 de la Ley General de la Administración Pública, la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. Dicho vicio puede tornar al acto presuntamente defectuoso en inválido total o parcialmente. De allí que la Ley referida, en su ordinal 165, divida los casos de invalidez en nulidad absoluta y nulidad relativa.

II. Que, en lo que interesa, según el ordinal 167 de la Ley General de la Administración Pública, acaece la nulidad relativa del acto administrativo cuando resulte imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta.

III. Que en lo atinente, los medios para subsanar un acto relativamente nulo corresponden a la convalidación y al saneamiento, los cuales están consagrados respectivamente en los artículos 187 a 189 de la Ley General de la Administración Pública, regulando los modos de conservar actos administrativos que si bien surgieron afectados con algún vicio de nulidad en uno o varios de sus elementos constitutivos, en virtud de estos institutos en algunos casos se pueden ajustar a derecho siguiendo ciertas formalidades (Sentencia N.°118-2016 de las 14 horas 45 minutos del 31 de marzo de 2016, dictado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo).

IV. Que, de esta forma, el saneamiento consiste en una forma de convalidación que permite la conservación del acto, con un vicio de nulidad relativa, que ha omitido una formalidad sustancial, la cual se puede dictar después del acto y tiene efecto retroactivo a la fecha del acto saneado (artículo 188 de la Ley General de la Administración Pública). De esa manera, “(…) el saneamiento se erige en estos casos como ‘(…) una forma singular de convalidación consistente en la posibilidad de conservación de actos que han omitido formalidades sustanciales en las que se requería la intervención de otro órgano o del administrado’ (SABORÍO VALVERDE, Rodolfo, Eficacia e invalidez del acto administrativo, San José, Editorial Alma Mater, 1986, p. 87), en cuyo caso dicha intervención deberá darse después de dictado el acto con una manifestación expresa de conformidad. (…)” (Dictamen N.° C-297-2009 del 23 de octubre de 2009, dictado por la Procuraduría General de la República).

V. Que con ocasión a un yerro humano en el sistema digital destinado al procedimiento de imposición de rúbricas en los decretos de alcance normativo, acaeció un vicio en el Decreto Ejecutivo N° 41820-H del 19 de junio de 2019, consistente en que no se ha logrado verificar la implantación de la firma del titular de la cartera de Hacienda; por lo que se considera que se ha producido un vicio en el Reglamento aludido, tornándolo relativamente nulo, a tenor del artículo 167 de la Ley General de la Administración Pública.

VI. Que el ordinal 168 de la Ley General de la Administración Pública contiene el principio de conservación del acto administrativo, según el cual señala que, en caso de duda sobre la existencia o calificación e importancia del vicio, deberá estarse a la consecuencia más favorable a la subsistencia del acto presuntamente defectuoso.

VII. Que la Procuraduría General de la República ha recordado que la falta de rúbrica es un elemento subsanable del acto administrativo, y por lo tanto, es posible la aplicación de los artículos 187 y 188 de la Ley General de la Administración Pública, relativos la convalidación y saneamiento de los actos administrativos: “De lo expuesto hasta ahora, podemos concluir que el órgano de desconcentración máxima puede tomar las medidas necesarias para subsanar los vicios existentes en la trascripción y firma de sus actas, aun cuando haya cambiado su integración, y siempre que ese saneamiento se ajuste a las reglas previstas en los artículos 187 y 188 de la Ley General de la Administración Pública” (Dictamen Nº C-471-2006 del 23 de noviembre de 2006 de la Procuraduría General de la República).

VIII. Que como los actos relativamente nulos pueden ser subsanados mediante la invocación de medidas de enmienda tales como la convalidación o el saneamiento, según lo mencionado en los considerandos precedentes, y dado que el interés del Poder Ejecutivo siempre ha sido la emisión y la producción de efectos jurídicos del Decreto Ejecutivo N.° 41820-H, se estima que, en el presente caso, por tratarse de un vicio que, en última instancia, consiste en la ausencia de una formalidad sustancial, basta con crear en el presente Decreto Ejecutivo una norma que sanee el Decreto Ejecutivo N.° 41820-H y que ratifique todas las actuaciones derivadas de éste para que se tenga por corregido el error señalado.

IX. Que de conformidad con el principio del paralelismo de formas, comúnmente conocido bajo la expresión “de que las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen”, el presente Decreto Ejecutivo debe ser firmado, tanto por el Presidente de la República, como por el actual titular del Ministerio de Hacienda, para que los efectos de la enmienda indicada sean plenos. X. Que el presente Decreto no requiere del procedimiento de consulta pública, establecido en el artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755 del 3 de mayo de 1971 y sus reformas, ya que razones de interés público así lo requieren como son la necesidad de sanear un decreto reglamentario que sirve de base normativa para justificar tanto la Resolución N.° DGT-R-033-2019 a las 08 horas 25 minutos del 20 de junio de 2019, denominada “Resolución General sobre las disposiciones técnicas de los comprobantes electrónicos para efectos tributarios”, como los actos administrativos derivados de su aplicación. Asimismo, razones de urgencia sobresalen como es el advenimiento del cierre del periodo fiscal 2019, ya que los contribuyentes usan la información de sus comprobantes electrónicos para completar las deposiciones juradas del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el valor agregado; y el cumplimiento, a partir del 1 de enero de 2020, de la factura electrónica de compra para aquellos contribuyentes que deban justificar sus gastos.

XI. Que el presente Decreto no tiene que cumplir con el procedimiento de control previo, establecido en el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo N.º 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012 y su reforma “Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”, por cuanto no se está creando nuevas obligaciones para los contribuyentes y, en todo caso, el presente Decreto tiene como fin mantener la eficacia de las disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo N.° 41820, salvaguardando así el principio de legalidad, el de seguridad jurídica y, especialmente, el de confianza legítima.

**Por tanto,**

**Decretan:**

ARTÍCULO 1.- Se convalida el Decreto Ejecutivo N.° 41820 del 19 de junio de 2019, denominado “Reglamento de comprobantes electrónicos para efectos tributarios”, subsanándose el defecto contenido en el mismo, relativo a la implantación de la rúbrica del titular de la cartera de Hacienda; y, por ende, se mantienen todos sus efectos jurídicos, surgidos a partir del 1 de julio de 2019, fecha en la cual entró en vigencia.

ARTÍCULO 2.- Las resoluciones, los oficios de respuesta a las consultas amparadas o no al artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, así como cualquier otro acto administrativo sustentado en el Decreto Ejecutivo N.° 41820 del 19 de junio de 2019, mantienen todos sus efectos jurídicos a partir del 1 de julio de 2019.

ARTÍCULO 3- Vigencia.

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los seis días del mes de febrero de dos

mil veinte. CARLOS ALVARADO QUESADA.—El Ministro de Hacienda, Rodrigo A. Chaves

Robles.—1 vez.—( D42194 - IN2020434094 ).